

El espíritu de Ermua

Santos Juliá

Anuario El País, 1998

Cuando el 12 de julio de 1997, los secuestradores de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua, abandonaron su cuerpo herido de muerte, una profunda conmoción sacudió a todo el país. Las matanzas indiscriminadas causadas por ETA en Vic y Barcelona, en el patio de un cuartel de la Guardia Civil y en un supermercado, habían sido pruebas inapelables de la crueldad a la que puede conducir el fanatismo nacionalista. Pero ahora parecía como si ETA hubiera traspasado un límite insoportable de inhumanidad. El grito unánime -¡basta ya!- que se propagó como un incendio después de la noticia del crimen, saltando de Ermua a Bilbao, de allí a Barcelona, Madrid, Sevilla y tantas ciudades, en manifestaciones multitudinarias de una magnitud nunca antes vista, era la expresión de la fatiga por tanto crimen pero era también como un alarido de incredulidad: costaba trabajo creer que, por muy desbordado que estuviera su fanatismo político o por muy ciego que fuera su odio, se pudiera llegar a esos extremos de impiedad.

Seguramente, la emoción que surgió del mismo municipio al que el desventurado concejal servía en calidad de representante libremente elegido por un sector de sus ciudadanos, y que se extendió por todas partes en una oleada unánime de repulsa de los criminales y de sus cómplices, vino sobredeterminada por la mirada de radical desolación que todos tuvimos ocasión de contemplar unos días antes en el rostro demacrado de José Antonio Ortega. Lo que habían hecho con Ortega, lo que hacían ahora con Blanco, no podía ser: tal fue el sentimiento que dominó incluso a quienes han mantenido ante las acciones terroristas la reserva de la equidistancia como si se tratara de actos violentos provocados por un conflicto ancestral. En ese momento, una línea divisoria clara, sin terceras vías posibles, sin terrenos que explorar, separaba a los autores del crimen y a sus cómplices de todos los demás.

Lo que se ponía en marcha en aquel momento era la decisión de aislar al mundo que sirve de apoyo a ETA para legitimar y hasta exaltar sus actos de terror. Si la salida de la gente a la calle tuvo en Ermua un significado que desbordaba el lugar y el tiempo en que acaeció fue porque allí se produjo una fusión de voluntades por encima de las legítimas opciones partidarias de cada cual. Las voluntades políticas, tantas veces discrepantes, se fundieron en un objetivo común y concreto: levantar una barrera contra la barbarie nacionalista que la sociedad vasca y el Estado español sufren desde hace ya demasiado tiempo. Si en Ermua hubo algo más que un rito de consecuencias previsibles fue porque, una vez disuelta la manifestación, los ciudadanos permanecieron vigilantes, convencidos de que no habían rematado la tarea; que quedaba todavía algo por hacer y que ellos mismos, si querían, podían hacerlo.

El instinto político de su alcalde, situándose al frente de los manifestantes, evitó que explotara toda la carga de aquella forma no ritualizada de manifestación, pues cuando una multitud siente la urgencia de hacer algo, suele dirigirse iracunda contra sus opresores con ánimo de lincharlos. Aquella noche, las gentes del entorno de ETA tuvieron que echar los cierres de sus tiendas y cerrar sus ventanas. Aquella noche, porque se hizo presente un espíritu, el miedo cambió de bando, pues ese es el espíritu que cierra la boca de los equidistantes y de los cómplices más o menos larvados, y obliga a definirse, a decir de parte de quién se está, si con los verdugos o con las víctimas. Lo expresó con toda claridad el lehendakari Ardanza en un comunicado de irreprochable factura mientras otros dirigentes políticos, sindicales y eclesiásticos, normalmente más locuaces, prefirieron guardar un embarazoso silencio: también a ellos podía arrastrarles la marea.

Todos tuvieron la convicción de que algo había cambiado. Pero esos espíritus no son eternos: se manifiestan y luego dejan paso otra vez a la rutina, a la política convencional. Y la política convencional no es posible sin que entren en juego cálculos partidistas, sin que cada partido marque sus distancias con el vecino con el propósito de no perder su clientela. Por una parte, el hecho de que el asesinato tuviera una adscripción política conocida podía llevar las simpatías de mucha gente hacia el Partido Popular, lo que los partidos nacionalistas no dejaban de contemplar con inquietud; por otra, la tentación de rentabilizar esa fusión de voluntades fue torpemente conducida por el Partido Popular a un deplorable espectáculo. Mientras tanto, las filas del nacionalismo equidistante recomponían el gesto dando curso de nuevo a iniciativas de "pacificación" con alambicadas interpretaciones de la disposición adicional primera de la Constitución.

Y así, a las pocas semanas de aquella fusión de voluntades, y de la destitución de algunos concejales de HB, parecía como si lo que más importara a los líderes de los partidos políticos fuera manifestar otra vez sus distancias respecto a lo que era preciso hacer con ETA. Por eso quizá, cuando el año terminaba con el asesinato del concejal del PP en Rentería, José Luis Caso, hubo que renovar el gastado lenguaje de siempre: que así no se podía seguir, que era precisa la unidad de los demócratas... Al finalizar 1997, lo único que quedaba claro era que la gente, el pueblo, los ciudadanos, habían ido por delante de los líderes políticos, pero también que toda esa movilización se derramaba como agua en el cesto mientras los partidos democráticos no eran capaces de llegar a acuerdos de acción a los que atener firmemente su conducta.